



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
PROGRAMA DE TITULACION PROFESIONAL



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

**El Efecto del Principio de Oportunidad en el distrito judicial de
Lambayeque como consolidación de la Ultima Ratio del Derecho
Penal.**

PRESENTADA POR:

JOSÉ ANDRÉS CASTRO NAVARRO

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

ASESOR:

DR. CARLOS MARTÍNEZ OBLITAS

LAMBAYEQUE, 2017

DEDICATORIA

A, mi familia con todo el corazón

AGRADECIMIENTO

**A todos aquellos que hicieron posible
esta investigación que servirá para
dar un paso más en mi realización
personal.**

INDICE

DEDICATORIA.....	2
AGRADECIMIENTO	3
INDICE.....	4
RESUMEN.....	6
ABSTRACT.....	7
INTRODUCCIÓN	8
CAPITULO I	12
ASPECTOS METODOLÓGICOS	12
1.1. Título.	12
1.2. Personal investigador.	12
1.3. Tipo de investigación.	12
1.4. Área de investigación.	12
1.5. Línea de investigación.	12
1.6. Justificación del problema.	12
1.7. Realidad Problemática.	14
1.7.1. Planteamiento del Problema	15
1.7.2. Formulación del Problema.	17
1.8. Objetivos.	18
1.8.1. Objetivo General.	18
1.8.2. Objetivos Específicos.	18
1.9. Hipótesis.	18
1.10. Variables	19
1.10.1. Variable Independiente	19
1.10.2. Variable dependiente.	19
CAPITULO II.....	19
EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA DOCTRINA.....	19
2.1. Antecedentes de la investigación.	19
2.2. Definición del Principio de Oportunidad.	21
2.3. Naturaleza Jurídica	25
2.4. Alcances Del Principio De Oportunidad	27
2.5. Mecanismo De Aplicación Del Principio De Oportunidad	29
2.6. Efectos Del Principio De Oportunidad	33
CAPÍTULO III.....	34
EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DERECHO COMPARADO	34
3.1. La finalidad del Principio de Oportunidad en el Derecho Comparado 35	
3.1.1. Colombia	35
3.1.2. Alemania	39
3.1.3. Estados Unidos.	41
3.1.4. En la Legislación italiana	44
3.1.5. En la legislación argentina	46
CAPÍTULO IV.....	48
LA APLICACIÓN FACULTATIVA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE	48
4.1. El Principio de Oportunidad y la Obligación Funcional.	48
4.2. Confrontación de principios: Oportunidad y Legalidad.	51
4.3. El Principio De Oportunidad En El Nuevo Código Procesal Penal	54
4.4. Efectos de la aplicación del principio de oportunidad en el Distrito Judicial de Lambayeque.	60
CAPÍTULO V.....	65
CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS	65

5.1. Discusión.....	65
5.1.1. Incapacidad del Estado e Ineficacia del sistema penal.....	65
5.1.2. Acción Penal, Principio De Legalidad Y Principio De Oportunidad	
67	
5.1.3. Recopilación Estadística.....	72

RESUMEN

La iniciativa para el desarrollo de este trabajo se inspira en la verificación de graves problemas como lo constituye la congestión de los despachos judiciales que desborda la capacidad de trabajo de los funcionarios y personal judicial, sobrecargando sus labores muchas veces con delitos de menor importancia (en cuanto al interés público protegido y al bien jurídico afectado).

En ese entorno el Principio de Oportunidad busca solucionar gran parte de este problema, el cual constituye una excepción a la rigidez del principio de legalidad, otorgando a los Fiscales Provinciales la capacidad de abstenerse de ejercer la acción penal no formalizando denuncia, conforme a lo regulado por el Código Procesal Penal y aplicable fundamentalmente a los delitos denominados en la doctrina como delitos de bagatela. Por lo cual se encuentra necesario observar cuan eficaz y oportuno es dicho mecanismo, que más allá de cuestiones formales que pueden ser sometidas a una extensa discusión doctrinaria, se buscará determinar si es posible el descongestionamiento del recargado despacho judicial, auxiliando de forma rápida y eficaz a la víctima del delito, evitando la estigmatización de quien, por hechos culposos, pero sin intención o de menor gravedad, incurre en hechos prohibidos por la legislación penal, significando un ahorro para el Estado y para los justiciables, entre otras ventajas.

Palabras claves: Principio de oportunidad, celeridad procesal, principios, ultima ratio.

ABSTRACT

The initiative for the development of this work is inspired by the verification of serious problems such as the congestion of judicial offices that overflows the work capacity of officials and judicial personnel, often overloading their work with minor crimes (in as for the protected public interest and the legal good affected).

In that environment, the Principle of Opportunity seeks to solve a large part of this problem, which constitutes an exception to the rigidity of the principle of legality, granting the Provincial Prosecutors the ability to refrain from exercising criminal action by not formalizing a complaint, as regulated by the Criminal Procedure Code and applicable primarily to crimes referred to in the doctrine as trifle crimes.

Therefore, it is necessary to observe how effective and timely this mechanism is, that beyond formal issues that can be subjected to extensive doctrinal discussion, it will be sought to determine if decongestion of the recharged judicial office is possible, quickly and efficiently assisting to the victim of the crime, avoiding the stigmatization of those who, for wrongful acts, but without intention or of less serious nature, incur in acts prohibited by criminal legislation, meaning savings for the State and for the parties, among other advantages.

Keywords: Principle of opportunity, procedural speed, principles, last ratio

INTRODUCCIÓN

Actualmente, nuestro país se encuentra en una difícil situación en lo que a Justicia se refiere; es harto conocido que los justiciables reclaman en demasía la pronta solución de sus casos, sin embargo, esta problemática de enfrentar a la numerosa pequeña y mediana criminalidad tiene un significado capital para la eficacia de la administración de justicia.

Y es que hoy en día es innegable la crisis en la administración de justicia en nuestro Perú, crisis que se traduce en excesiva carga procesal, retardo y falta de celeridad en la resolución de conflictos; siendo en última instancia -cuando se trata de causas penales- los únicos perjudicados la víctima y el presunto autor, la primera porque su pretensión reparatoria no se satisface con prontitud y el segundo por la incertidumbre y posterior estigmatización que trae consigo un proceso penal, dicha crisis ha derivado en una huida hacia los medios alternativos de solución de conflictos, más por necesidad que por convencimiento de su utilidad práctica.

En tal confrontación de hechos o situaciones, se dice que entre la comisión de un delito y la aplicación de una sanción hay un camino que recorrer: el proceso penal¹. En tal contexto, resulta ineludible no solo advertir la crisis de la administración de justicia sino perseguir una opción que permita descongestionar nuestro saturado sistema o, en el mejor de los casos,

¹ Cubas, V. (2003). El Proceso Penal, Teoría y Práctica. Palestra editores. 5ta edición. Lima. p, 54.

privilegiar medios alternativos de solución de conflictos que tenga por finalidad principal la búsqueda de reparar prontamente a la víctima.

Ya desde 1991, los legisladores en el Perú han usado dos instrumentos de política criminal con los que se ha pretendido combatir este problema: la posibilidad del archivo por razones de oportunidad mediando el cumplimiento de unas condiciones o mandatos, método cuya implementación ha dado excelentes resultados en los países en los que fue instaurado, y la finalización del proceso a través del consenso entre el Juez, el Ministerio Público y la defensa, es decir la terminación anticipada del proceso.

Como quiera que la judilización de los casos denunciados es un problema latente y real, el presente estudio se circunscribe a la aplicación del Principio de Oportunidad, el cual permite a las partes involucradas a solucionar el conflicto jurídico penal surgido, sin necesidad de formular denuncia y dar inicio a un proceso penal. Asimismo, también puede producirse en el proceso penal a cargo del juez, en el que igualmente es posible la aplicación del principio de oportunidad.

El Principio de Oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, para (bajo determinadas condiciones establecidas expresamente por ley) abstenerse de su ejercicio, o en su caso, para solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento

de la causa bajo los mismos supuestos. Debiendo para ello existir elementos probatorios de la comisión del delito y de la vinculación con el imputado, quien debe prestar su consentimiento para la aplicación del citado principio. Esta definición corresponde al Sistema de Oportunidad Reglada, toda vez que los criterios de oportunidad obedecen a supuestos expresamente señalados por ley, a diferencia del Sistema de Oportunidad Libre, propia de países anglosajones, como Estados Unidos donde el Titular de la Acción Penal tiene plena disponibilidad y discrecional en su ejercicio. Este primer sistema, pues, es adoptado por nuestro ordenamiento procesal penal.

El Principio de Oportunidad puede ser solicitado y aplicado a nivel fiscal, e incluso, después de formulada la denuncia penal ante el Juzgado Penal.

El Fiscal Provincial, al tomar conocimiento (de oficio, por informe policial o por denuncia de parte) de la existencia de un delito y apreciar indicios razonables de su comisión, así como de la participación del imputado en su realización y, siempre que el hecho revista alguna de las características previstas en el artículo 2º del Código Procesal Penal, procederá a dar inicio al trámite para la aplicación del Principio de Oportunidad. Y en el supuesto en que la acción penal ya hubiera sido ejercida y el caso se encontrare a nivel judicial, el Fiscal podrá (a petición del agraviado) solicitar el sobreseimiento al Juez, conforme a los supuestos expresados por ley, hasta antes de la acusación.

Actualmente, a pesar de existir normas específicas que facilitan la solución de las discrepancias o conflictos al respecto, cabe aquí interrogarse si la actual legislación sobre el Principio de Oportunidad permite el cumplimiento eficiente en la solución de los casos denunciados y si son efectivos o no los mecanismos de este principio.

El Derecho, puede responder afirmativamente a esta interrogante, pero es a través del presente trabajo de investigación que se dará respuesta a este enunciado problemático y hacia ello está dirigido el análisis que se efectuará mediante el desarrollo del mismo.

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1. Título.

“El Efecto del Principio de Oportunidad en el distrito judicial de Lambayeque como consolidación de la Ultima Ratio del Derecho Penal”.

1.2. Personal investigador.

Autor : José Andrés Castro Navarro

Asesor : Dr. Carlos Martínez Oblitas

1.3. Tipo de investigación.

Básica.

1.4. Área de investigación.

Ciencias Sociales: Ciencias jurídicas.

1.5. Línea de investigación.

Derecho Penal.

1.6. Justificación del problema.

Si bien es cierto que la crisis en la administración de justicia en el Perú es un problema que se remonta a los orígenes mismos de la República; este pernicioso hecho se ha agudizado en las últimas décadas y muy especialmente en la década de los noventa, al final de la cual la sociedad peruana en su conjunto fue testigo de los mayores niveles de corrupción y manipulación a los que puede ser arrastrado un

gobierno; situación a la que no fue ajena nuestra administración de justicia en forma integral.

Ante esta realidad, sucesivos gobiernos y estudiosos en la materia han esbozado costosos estudios y diagnósticos los cuales han sido implementados en el transcurso del tiempo por medio de reformas, normas y acciones que luego de su aplicación nos han legado un resultado poco satisfactorio ante las enormes expectativas de los operadores de justicia y población en general.

No obstante y a pesar de todo, es justo reconocer que se han logrado valiosos aportes en cuanto a mejorar el desempeño del Poder Judicial y Ministerio Público, a través de la promulgación de importantes normas que permiten contrarrestar graves problemas como lo constituye la congestión de los despachos judiciales que desborda la capacidad de trabajo de los funcionarios y personal judicial, sobrecargando sus labores muchas veces con delitos de menor importancia (en cuanto al interés público protegido y al bien jurídico afectado). Esto resulta más grave aún si tenemos en cuenta que nuestra justicia penal sólo está sancionando un mínimo de los crecientes delitos que se cometen, lo que origina un pernicioso clima de impunidad.

Es por ello que con la dación del Principio de Oportunidad se busca solucionar gran parte de este problema, el cual constituye una excepción a la rigidez del principio de legalidad, otorgando a los Fiscales Provinciales la capacidad de abstenerse de ejercer la acción penal no formalizando

denuncia, conforme a lo regulado por el Código Procesal Penal y aplicable fundamentalmente a los delitos denominados en la doctrina como delitos de bagatela, por su escasa importancia y trascendencia social, que constituyen una de las principales causas de la lentitud y congestión en los despachos judiciales penales.

Por lo que el presente estudio conlleva la preocupación del autor por saber en qué medida es realmente eficaz y oportuno el Principio de Oportunidad, que más allá de cuestiones formales que pueden ser sometidas a una extensa discusión doctrinaria, se puede afirmar que el Principio de Oportunidad, como instituto aplicado al proceso penal, constituye un mecanismo idóneo para la mejora en la administración de justicia del país.

De tal manera que la investigación nos permitirá determinar si es posible el descongestionamiento del recargado despacho judicial, auxiliando de forma rápida y eficaz a la víctima del delito, evitando la estigmatización de quien, por hechos culposos, pero sin intención o de menor gravedad, incurre en hechos prohibidos por la legislación penal, significando un ahorro para el Estado y para los justiciables, entre otras ventajas.

1.7. Realidad Problemática.

1.7.1. Planteamiento del Problema

La crisis en la administración de justicia en nuestro Perú se traduce en excesiva carga procesal, retardo y falta de celeridad en la resolución de conflictos; siendo en última instancia -cuando se trata de causas penales- los únicos perjudicados la víctima y el presunto autor, la primera porque su pretensión reparatoria no se satisface con prontitud y el segundo por la incertidumbre y posterior estigmatización que trae consigo un proceso penal, dicha crisis ha derivado en una huida hacia los medios alternativos de solución de conflictos, más por necesidad que por convencimiento de su utilidad práctica.

En tal confrontación de hechos o situaciones, se dice que entre la comisión de un delito y la aplicación de una sanción hay un camino que recorrer: el proceso penal². En tal contexto, resulta ineludible no solo advertir la crisis de la administración de justicia sino perseguir una opción que permita descongestionar nuestro saturado sistema o, en el mejor de los casos, privilegiar medios alternativos de solución de conflictos que tenga por finalidad principal la búsqueda de reparar prontamente a la víctima.

Ya desde 1991, los legisladores en el Perú han usado dos instrumentos de política criminal con los que se ha pretendido combatir este problema: la posibilidad del

² CUBAS, V. (2003). El Proceso Penal, Teoría y Práctica. Palestra editores. 5ta edición. Lima. p, 54.

archivo por razones de oportunidad mediando el cumplimiento de unas condiciones o mandatos, método cuya implementación ha dado excelentes resultados en los países en los que fue instaurado, y la finalización del proceso a través del consenso entre el Juez, el Ministerio Público y la defensa, es decir la terminación anticipada del proceso.

El Principio de Oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, para (bajo determinadas condiciones establecidas expresamente por ley) abstenerse de su ejercicio, o en su caso, para solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa bajo los mismos supuestos. Debiendo para ello existir elementos probatorios de la comisión del delito y de la vinculación con el imputado, quien debe prestar su consentimiento para la aplicación del citado principio.

La realidad del Principio de Oportunidad, nos muestra que los operadores jurídicos del Derecho no se encuentran completamente preparados ni dispuestos para eliminar la ideología inquisitiva que el Código anterior traía consigo; a pesar que en los distritos judiciales donde el Nuevo Código se aplica, de forma deseable, ha disminuido la prisión preventiva –ya que es reservada sólo para los delitos graves o muy graves.

Para dar fundamento a nuestro planteamiento inicial recogemos el resultado del análisis que hace PABLO SANCHEZ VELARDE respecto de la institución dice que

han ingresado como denuncias al Ministerio Público un número total de 185,506 y se ha aplicado el principio de oportunidad sólo en 799 casos, es decir, el 0.43 %. En el mismo año, un trabajo de investigación de campo realizado en seis fiscalías provinciales penales de Lima, revela que de un total de 4,613 denuncias ingresadas, sólo en 91 casos se promovió la aplicación del principio de oportunidad y de ellas sólo 13 fueron archivadas en virtud de dicho principio³.

Será necesario resolver una serie de cuestionamientos enfocados al principio de oportunidad buscando verificar tanto los efectos de su aplicación cuanto los presupuestos que lo regulan, así con los resultados obtenidos podremos establecer el origen del problema y con ello generar una propuesta de solución que signifique un aporte al derecho normativo y doctrinario.

1.7.2. Formulación del Problema.

¿Cuál es el efecto de la aplicación del principio de oportunidad en la resolución de procesos penales en el distrito judicial de Lambayeque, sobre el principio de ultima ratio del Derecho Penal?

³ SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. *Manual de Derecho Procesal Penal*. Editora IDEMSA. Perú. 2004, pág. 393.

1.8. Objetivos.

1.8.1. Objetivo General.

Determinar el efecto de la aplicación del principio de oportunidad en la resolución de procesos penales en el distrito judicial de Lambayeque se condice con el principio de ultima ratio del Derecho Penal.

1.8.2. Objetivos Específicos.

- Desarrollar teóricamente el Principio de Oportunidad.
- Estudiar el Principio de Oportunidad en el derecho comparado.
- Describir la aplicación facultativa del Principio de Oportunidad de los operadores de justicia en las Fiscalías Provinciales Penales en el Distrito Judicial de Lambayeque
- Determinar una propuesta que permita la correcta aplicación del principio de oportunidad en función al principio de última ratio del Derecho Penal.

1.9. Hipótesis.

Sí, la aplicación del principio de oportunidad en la resolución de procesos penales en el distrito judicial de Lambayeque es ineficiente; entonces, se estará contraviniendo el principio de la última ratio del Derecho Penal.

1.10. Variables

1.10.1. Variable Independiente

El Principio de Oportunidad en el distrito judicial de Lambayeque

1.10.2. Variable dependiente.

El Principio de la Ultima Ratio del Derecho Penal.

CAPITULO II

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA DOCTRINA

2.1. Antecedentes de la investigación.

Para tener un mayor alcance del tema que desarrollaremos en la presente labor académica, debemos remitirnos a investigaciones

que se han realizado con anterioridad bajo el supuesto de entender la figura del principio de oportunidad, tomamos como referencia a la investigación realizada por BAZAN, donde verifica la aplicación del principio estudiado en la jurisdicción de Loreto; de lo cual extraemos la siguiente cita:

“Evidentemente, las estadísticas antes citadas reflejan una subutilización del principio de oportunidad en nuestro país. No obstante, en los últimos años, específicamente en el año 2006 ingresaron al Ministerio Público 184,067 denuncias a nivel nacional aplicándose el principio de oportunidad en 4,770 casos lo que arroja un 2.59 %; a septiembre de 2007 el índice de aplicación se incrementa a un 3.21 %; índices porcentuales aún bajos esperándose que se continúe con la tendencia del crecimiento si se tiene en cuenta que el proceso de reforma concluye con Lima metropolitana en el año 2012. Lo expresado invita a una reflexión a fin de determinar cuál es la problemática de esa escasa aplicación práctica de la oportunidad. Se van a señalar sólo dos factores que se cree son los que más influyen para que no se aplique el principio de oportunidad por los señores fiscales”⁴.

⁴ BAZAN BARRERA, Samanta Yusilu; VERGARA CABRERA, Elma Sonia. Principio De Oportunidad Aplicado Por Los Operadores De Justicia En Las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas De La Provincia De Maynas, Distrito Judicial De Loreto, Octubre 2012 - Abril 2013. Tesis para optar el grado académico de Magister en Derecho Penal; Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. San Juan, 2014.

De la referencia recogida podemos verificar que la investigadora determinar un problema en la aplicación del principio de oportunidad, haciendo notar que el problema radica en la forma de la aplicación; es justamente ello lo que nos invita a verificar la realidad que se experimenta en el distrito judicial de Lambayeque, con la intención de saber si su ejecución es eficaz y en todo caso proponer las posibles soluciones al caso en concreto.

2.2. Definición del Principio de Oportunidad.

Al tratar nuestra investigación sobre el principio de oportunidad hemos de ubicar acercamientos doctrinarios al concepto, con la correcta significación podremos desarrollar su estudio en forma adecuada, por ello tomamos lo referido por ALMAGRO, quien es citado por SAN MARTIN CASTRO, quien define al principio de oportunidad de la siguiente manera:

“El principio de presunción de inocencia que consagra la Constitución Política del Perú y el Nuevo Código Procesal Penal, es un derecho subjetivo público individual”⁵.

Esta puntualización nos da la ubicación dentro de la estructura del Derecho además de señalar el tipo de derecho que constituye; pero, es preciso definir en función al contenido o la finalidad de su existencia, para ello tomamos lo referido por ORE, quien hace un esbozo de su contenido como principio de la siguiente manera:

⁵ ALMAGRO NOSSETE citado por César San Martín Castro; “Derecho Procesal Penal”, Ed. Grijley, Vol. I, Lima2001, Pág. 67

“Este principio de amplio reconocimiento tanto en el derecho internacional como nacional, consagra la presunción legal (juris tantum) de todo imputado de ser considerado inocente hasta que se pruebe su responsabilidad en un debido proceso, mediante sentencia firme debidamente motivada. Ello significa que el procesado no tiene por que demostrar su inocencia, dado que la carga de la prueba recae en nuestro ordenamiento sobre el Ministerio Público, quien es el que debe promover toda la actividad probatoria de cargo, sin embargo el imputado goza de pleno derecho de defensa, de carácter irrenunciable”⁶.

Teniendo ya una aproximación respecto al contenido del principio de oportunidad, será conveniente para el desarrollo de nuestra investigación conocer cuál es la justificación de la existencia de esta figura.

Según lo hasta aquí trabajado podemos entender que la existencia del principio de oportunidad tiene una justificación, aquella de la que habla PEÑA, cuando dice:

“...la justificación del principio de oportunidad se encuentra inmersa en la política criminal, pues se trata de descongestionar la justicia penal de procesos de baja criminalidad, para avocar la persecución punitiva a los delitos que quebrantan gravemente el orden público y en consecuencia perturban la convivencia social”⁷.

⁶ ORÉ GUARDIA, Arsenio. Estudios de Derecho Procesal Penal, Ed. Alternativas, Lima, 1993, Pág. 18

⁷ PEÑA CABRERA, Raúl; Tratado de Derecho Penal, Parte general, Ed. Grijley, 5ta Edición, Lima 1994, Pág. 131

Si el titular de la acción penal es el Ministerio Público, el jurista SENDRA habla de la disposición de esta facultad, indicando esta característica del principio de oportunidad:

“... es la facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer bajo determinadas condiciones de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado”⁸.

Será correcto entonces hablar de una renuncia a la acción penal, o ¿cómo es que se debe entender el principio de oportunidad?, sobre ello nos habla BACIGALUPO señala que:

“...el principio de oportunidad no debe entenderse exclusivamente como una renuncia bajo ciertas condiciones a la acción penal diversificado del conflicto social representado por el hecho delictivo”⁹.

Hablamos entonces de una facultad, la misma que depende de un criterio técnico jurídico que emitirá a su juicio el Fiscal como representante del Ministerio Público que es el titular de la acción penal, tal criterio puede variar en función al hallazgo de un hecho que constituya delito o no; así nos los explica CREUS, quien considera sobre el principio de oportunidad como:

“...la posibilidad que el funcionario posee de discriminar si se encuentra o no ante un hecho que puede constituir delito, para promover la acción o abstenerse de

⁸ GIMENO SENDRA, Vicente. Fundamentos del Derecho Procesal Penal, Madrid. 1991. p. 34

⁹ BACIGALUPO, Enrique. Discriminación y Prevención en Poder Judicial. N° 11, Madrid. 1987. 13.

hacerlo¹⁰.

En el ámbito del derecho penal peruano podemos encontrar autores que definen el principio de oportunidad desde un punto de vista positivo, poniendo énfasis en los aspectos normativos y procesales. Así tenemos que para Oré Guardia¹¹, este principio es un mecanismo procesal a través del cual se faculta al Fiscal titular de la acción penal para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, o en su caso a solicitar el sobreseimiento cuando concurren los requisitos exigidos por ley.

Nuestro ordenamiento jurídico comprende el principio de oportunidad como la facultad que tiene el ministerio público por su titularidad, para pronunciarse sobre la viabilidad de la acción penal, en razón a determinadas previsiones legales de discrecionalidad, incorporados por el legislador para delimitar la aplicación del principio y evitar un uso que desnaturalice su finalidad, es lo que en la doctrina se denomina principio de oportunidad reglada, el cual acoge el Código Procesal Penal de 1991 y el nuevo Código Procesal Penal, sin embargo la ratio legis, establece la aplicación de dicho principio en sede fiscal y en ámbito jurisdiccional, en el cual tiene el dominio de la situación la autoridad fiscal, incluso más que el propio imputado, de quien se requiere su consentimiento expreso. Pero bueno como todo principio requiere de mecanismos por el cual pueda materializarse, en el caso peruano, se ha venido

¹⁰ CREUS, Carlos. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires. Astrea. 1987. p. 36.

¹¹ ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit. p. 133

a incorporar el acuerdo reparatorio, a la usanza de una audiencia de conciliación, pero con ciertos matices peculiares que son muy discutibles.

Finalmente, podemos decir que el principio de oportunidad aplicado en nuestro país, viene a ser, la excepción al principio de legalidad por el cual el Ministerio Público con expreso consentimiento de las partes, puede abstenerse de ejercer la acción penal y promover el archivamiento del proceso en los casos en que la ley señala y en razón a un interés público.

2.3. Naturaleza Jurídica

Cuando hablamos de principio de oportunidad, nos referimos principalmente a medidas que propendan a solucionar la crisis del enjuiciamiento penal, a partir de mecanismos que permitan la celeridad procesal y descongestión de las causas penales de baja criminalidad, por medios que reflejen el respeto a las granitas constitucionales que orientan el proceso penal; en ese sentido *GIMENO SENDRA*, señala; que el fundamento del principio de discrecionalidad podría encontrarse en la escasa entidad de daño social producida por la comisión de delito o en la personalidad del imputado¹².

Sin embargo, para *PABLO SÁNCHEZ VELARDE*, su fundamento es de carácter “*política criminal*”, obedeciendo a una necesidad de solucionar problemas de saturación de los

¹² GIMENO SENDRA, Vicente.; Constitución y Proceso; Tecnos; Madrid; 1998; p. 56

procesos penales. En efecto las razones que motivan esta innovación legislativa son en orden al “interés público”, para evitar la persecución de determinados ilícitos penales de pequeña criminalidad en función a la crisis de la justicia penal, caracterizada actualmente por congestión procesal y penitenciaria, sin que ello signifique un grado de impunidad, ya que se justifican la medida, mediante presupuestos de discrecionalidad legal, por el cual los casos aplicables al principio, obedecen a que el hecho no implica una perturbación grave del orden público y cuestiones personales del agente.

Según el decir de MAIER, se debe entender en el principio de oportunidad sobre la inocencia del imputado:

“Este principio, no afirma que el imputado sea en verdad, inocente, sino, que no puede ser considerado culpable hasta la decisión que pone fin al procedimiento condenándolo” ¹³.

Desde luego esto forma parte importante de la naturaleza jurídica del principio de oportunidad, pero hace falta además entenderlo como una garantía mas que como un derecho, en ese sentido CUBAS, refiere lo siguiente:

“...como una garantía fundamental de la Constitución y la ley procesal a favor del ciudadano frente al poder estatal, su reconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional, obedece a un interés social, de protección de la libertad y seguridad de la persona humana en

¹³ MAIER, Julio... “Derecho Procesal Penal Argentino”, T.1a Editorial Hamurabi S.R.L. Buenos Aires 1989, Pág. 492

concordancia a un Estado Social y Democrático de Derecho, el cual consagra a la persona como fin supremo de la sociedad y del Estado, y es aquel donde el poder público está limitado por los derechos individuales”¹⁴.

En resumen, por medio de la discrecionalidad penal se busca un fin político de disminución de procesos penales por medio de soluciones extrapunitivas, lo cual se justifica en la aplicación a hechos punibles que por su naturaleza representan una medida legítima, siendo en consecuencia la naturaleza jurídica del principio de oportunidad de interés público, ya que se ampara en un propósito de política criminal.

Sin embargo, los medios utilizados también requieren de ser legítimos, ello implica el respeto a los derechos fundamentales y la constitución.

2.4. Alcances Del Principio De Oportunidad

Las posturas sobre la correcta aplicación del principio de oportunidad pueden ser varias, es preciso conocer cuál es la tendencia existente en nuestro país respecto a su aplicación, para ello tomaremos como referencia a lo establecido por la Corte Suprema, quien indica que el principio de oportunidad peruano, adquiere vigencia en la dilucidación de la necesidad social de formalización de la denuncia penal por parte del

¹⁴ CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El Proceso Penal; Palestra Editores, 5ta Edición, Lima 2003, Pág. 27- 28

Ministerio Público, por lo cual la autoridad fiscal además de verificar los tres presupuestos para ejercitar la acción penal que son:

“a) Indicios suficientes de que el hecho constituye delito, b) Haber individualizado al presunto autor, y c) No haya prescrito la acción penal; debe observar los criterios de discrecionalidad que la ley establece, para abstenerse de la acción penal, que obedece al insignificante grado de injusto que trasunta el hecho delictivo y la falta de perturbación del orden público para una reacción punitiva”¹⁵.

La regulación del Código Procesal Penal de 1991 y el nuevo Código Procesal Penal establecen dos ámbitos de aplicación del principio de oportunidad reglada, la primera cuando la denuncia se encuentra en la esfera del Ministerio público, en el cual el fiscal adopta la facultad discrecional. La segunda cuando se ha promovido la acción penal en instancia judicial, correspondiéndole al juez de la causa, a petición del Ministerio Público y con consentimiento del imputado, adoptar la potestad discrecional y en consecuencia archivar el proceso.

En resumen, el principio de oportunidad peruano es de carácter extraprocesal e intraprocesal, ello significa que adquiere vigencia tanto antes del proceso como durante el proceso, ello por supuesto acarrea múltiples problemas y conflictos.

¹⁵ Criterio vinculante establecido en el fundamento 9 del Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2- 2012/CJ-116

2.5. Mecanismo De Aplicación Del Principio De Oportunidad

El principio de oportunidad en nuestro ordenamiento penal se aplica bajo ciertos parámetros que se establecen como mecanismo para su aplicación, donde juega un papel importante el cuestionado acuerdo reparatorio, ya sea en sede fiscal o instancia judicial, en el primer caso mediante una citación efectuada por Ministerio público de oficio o a petición del imputado, a una diligencia de acuerdo, y en el segundo supuesto, Promovida por el juez a petición de la autoridad fiscal a una audiencia que cuasi conciliación, en ambos casos dichos actos tiene por único objeto el que las partes lleguen a un acuerdo respecto del monto de reparación civil que el imputado debe comprometerse solventar a favor del agraviado¹⁶.

Sin embargo, es necesario precisar que se entiende por reparación civil, para opinar sobre la idoneidad de la medida. En ese sentido ubicaremos una definición en la doctrina tomando como referencia lo aportado por QUINTEROS, que hace la siguiente acotación:

“...viene a ser la obligación de restaurar y reparar la situación jurídica quebrantada por la comisión de un delito o falta, valorado como ilícito desde una órbita civil, es la obligación (extracontractual) civil emergente del

¹⁶ MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Protocolo de mecanismos de negociación y solución del conflicto penal. Aprobados por Decreto Supremo N° 003-2014-JUS. Ubicado en <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/01/4-Protocolos-de-Mecanismos-de-Negociaci%C3%B3n-y-Soluci%C3%B3n-del-Conflicto-Penal.pdf>. Accedido el 07 de julio del 2017 a horas 3:00 pm.

delito, una de las consecuencias del hecho jurídico delictivo”¹⁷.

Podemos entender que es el deber que tiene el autor de restituir la cosa o resarcir el daño causado, es decir de la responsabilidad penal (culpabilidad) debidamente probado en un proceso penal surge la responsabilidad civil de resarcir los intereses afectados por el delito.

La reparación civil constituye el contenido y el objeto de la acción civil emergente del delito. En ese orden de ideas *GARCÍA RADA* manifiesta; que:

“La intervención del actor civil en el proceso penal se enmarca dentro de la pretensión resarcitoria, es decir, orientada a mantener la acusación, pues si se prueba y determina responsabilidad de la acusación, el agraviado tendrá derecho a la reparación civil”¹⁸.

En suma, la reparación civil, deriva del delito y se impone contra el imputado y contra terceros llamados a responder en razón de haber sido encontrado responsable del hecho punible dilucidado en un proceso penal.

También podemos recoger lo indicado por ONECA, quien se manifiesta sobre las consecuencias jurídicas del delito y las penas:

“Así podemos entender que las consecuencias jurídicas del delito no se agotan con la imposición de una pena o

¹⁷QUINTEROS OLIVARES, Gonzalo; Derecho Penal, Parte general, Ed. Marcial Pons, Madrid 1992, Pág. 670

¹⁸ GARCIA RADA, Domingo. Manual de Derecho Procesal Penal. EDDILI. Lima 1984, pág. 84.

una medida de seguridad al autor del ilícito penal, sino que también pueden surgir otras formas de ajusticiamiento de carácter civil reparador”¹⁹.

Basado en este principio reparador del daño, surgió tal vez la noción básica que justifica a la oportunidad dentro del proceso, la posibilidad que se le puede otorgar a quien por una cuestión fortuita haya ocasionado un daño sin intención.

Entonces debemos pensar en una coadyuvación de la impartición de justicia, pues así lo comprende FLORIAN, cuando enseña esta combinación en función a un interés social:

“La Reparación Civil acompaña y refuerza la acción penal, dado a que existe un interés social en que ella sea satisfecha juntamente con la pena que corresponde en caso de condena. Ello en concordancia al Art. 92° del Código Penal que preceptúa *“la reparación civil se determina conjuntamente con la pena”*²⁰.

El surgimiento de la reparación civil se entiende como una consecuencia del delito y que su imposición es de manera conjunta con la pena, y la pena deviene necesariamente solo de la responsabilidad penal del imputado, en ese sentido podemos entender a la reparación civil como la sanción de índole civil directamente ligada a la culpabilidad del procesado.

¹⁹ ANTON ONECA, José; Derecho Penal, Parte general, Ed. Akal/Iure, 2da Edición, Madrid 1986, Pág. 645

²⁰ Decreto Legislativo N° 635, Código Penal, Gaceta Jurídica Editores, séptima edición, Lima 1999 Pág. 78

En suma, haciendo una interpretación sistemática de la norma, podemos deducir que mediante la diligencia de acuerdo reparatorio, se comprende al imputado como responsable penal, por el solo hecho de prestar su consentimiento en tal acto, que en su mayoría no tiene carácter jurisdiccional sino meramente administrativo, lo cual significa la manifiesta violación al principio de presunción de la inocencia y consecuentemente su inconstitucionalidad.

Luego de verificar la justificación de la existencia de una reparación civil, que en el principio de oportunidad viene a constituirse en el acuerdo reparatorio, toca verificar el cómo se deben concebir los criterios para la aplicación de este principio, para lo cual reseñamos lo dicho por *PEDRAZ PENALVA*, quien señala que:

“...los criterios de oportunidad, en su aplicación: **a)** no han de ser contrarios a los bienes constitucionalmente protegidos; **b)** tampoco han de serlo los medios utilizados, que aún siendo aptos para la consecución del fin propuesto en la norma, tienen que ser necesarios, en el sentido que no pueda alcanzarse idénticos resultados con otros menos gravosos **c)** en cuanto a las cargas resultantes para cada afectado, éstas deben estar en una razonable relación con el con los beneficios propios y los de la comunidad”²¹.

²¹ PEDRAZ PENALVA, Ernesto; “Principio de Proporcionalidad y Principio de Oportunidad”, Ponencia presentada en el III Congreso de Derecho Procesal de Castilla- León. Universidad de Salamanca, Salamanca.

2.6. Efectos Del Principio De Oportunidad

Son efectos del principio de discrecionalidad en relación al ámbito de aplicación:

a) *Como potestad fiscal*: Una vez arribado a un acuerdo entre las partes y producido el pago de la reparación civil, el fiscal emitirá una Disposición de Abstención de la acción penal, por el cual impide, bajo sanción de nulidad que otro fiscal promueve o orden que se promueva la acción penal por una denuncia que contenga los mismo hechos, es entonces donde surge la pregunta al respecto de que, si dicha disposición constituye cosa juzgada, dado que imposibilita a tenor de la norma toda persecución punitiva y cierra el telón de la reacción estatal, pero como todo sabemos los actos fiscales tienen carácter administrativo, y ello en ningún modo constituye una cosa juzgada sino solo cosa decidida, lo cual no implica la imposibilidad de remover dicha disposición o la vigencia del *non bis in idem*.

b) *Como facultad del juez preparatorio*; Una vez promovida la acción penal, el juez examina los criterios de discrecionalidad ha pedido del Ministerio público, y a cuyo efecto promueve una audiencia de acuerdo reparatorio, si ello se produce favorablemente con la subsiguiente cancelación de la reparación civil, el juez se encuentra facultado para emitir un auto de sobreseimiento, por el cual se archiva el proceso de manera definitiva, lo cual si constituye cosa juzgada una vez firme, porque es potestad jurisdiccional.

CAPÍTULO III

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DERECHO COMPARADO

En esta sección de nuestra investigación nos ocuparemos de recoger la forma en que es considerado el principio de oportunidad en distintos ordenamientos a nivel internacional, ello con el fin de verificar la existencia de criterios y con proponer luego la uniformidad de ser el caso al compararlo con lo que se establece en nuestro país. En ese sentido consideramos importante tratar sobre la finalidad del principio de oportunidad en los países seleccionados.

3.1. La finalidad del Principio de Oportunidad en el Derecho Comparado

3.1.1. Colombia

Debido a que la Constitución incorpora los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado y las normas de derecho internacional humanitario al bloque de constitucionalidad²², y que por ello las leyes internas deben ser acordes a tales normativas, el principio de Oportunidad fue limitado por el legislador al prohibir su aplicación cuando los hechos de los que se trate puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma

²² Citando a la Corte Constitucional de Colombia, "el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (CP arts 93 y 214 numeral 2º) es que éstos forman con el resto del texto constitucional un „bloque de constitucionalidad“, cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas (CP art. 4º), con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción (CP art. 93). Como es obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores". Sentencia C-225 de 1995.

(parágrafo 3° del artículo 324 de la Ley 906)²³.

De otro modo, podría invocarse el artículo 1.1. de la Convención Americana, que impone a los Estados Parte (entre ellos Colombia) la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Tratado a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, lo que supone a su vez no sólo que exista un orden jurídico que propenda por la realización de este mandato²⁴, sino además que el Estado se organice de tal modo que pueda asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Si se admitiera la aplicación del principio de Oportunidad frente a delitos como la desaparición forzada o el genocidio, el Estado violaría este mandato e incumpliría su obligación de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos fundamentales²⁵.

²³ Ello es acorde con el artículo 3° de la propia Ley 906, que consagra la prelación de los tratados internacionales: "En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar bloque de constitucionalidad".

²⁴ Artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades contempladas en la Convención.

²⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrafos 166-172

Desde la más temprana jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha sostenido que, el Estado está (...) obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción²⁶.

Por lo anterior, el principio de Oportunidad no puede aplicarse frente a hechos en los que se hayan visto afectados los derechos humanos protegidos por la Convención Interamericana. Por lo tanto, delitos como el homicidio doloso, el genocidio o la desaparición forzada siempre deberán ser investigados. Una interpretación distinta podría comprometer la responsabilidad internacional de Colombia ante la Corte Interamericana²⁷.

Esto tiene incidencia en el tema del conflicto armado, dado que numerosos jefes guerrilleros y para militares están vinculados a investigaciones por este tipo de delitos. El uso del principio de Oportunidad como mecanismo para otorgar “indultos” o “amnistías” a grupos armados ilegales por delitos que no pueden ser

²⁶ Ibidem., párrafo 176.

²⁷ BOTERO, Catalina. Foro Constitucional Iberoamericano. Novedades normativas: Colombia, Ley Estatutaria Nuevo Código de Procedimiento Penal. Página de Internet, dirección URL: <http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JCI/revista-06notnor-col4.htm> Consultado el 05 de julio del 2017.

perdonados ni por el gobierno ni por la rama judicial hubiera generado un conflicto con la Constitución y los Tratados internacionales, que habría de resolverse en la Corte Constitucional, y en la Corte Interamericana, respectivamente. No obstante, frente a delitos políticos, el principio de Oportunidad sí podría operar, v. gr., por colaboración con la justicia (numerales 5 y 6 del artículo 324 de la Ley 906), o en los eventos contemplados en los numerales 15 y 16 del artículo 324 de la Ley 906, con la excepción ya mencionada de improcedencia a favor de los jefes, organizadores, promotores o personas que suministren elementos para la realización del delito.

Otros aspectos considerados como esenciales para la aplicación del principio de oportunidad son el interés social y la utilidad pública, bajo el supuesto de encontrarnos con delitos que por su insignificancia, su escaso impacto social o su poca frecuencia no afecten gravemente el interés público.

En este punto tomaremos como referencia lo aportado por los juristas colombianos MOJICA y VÁSQUEZ, quienes indican lo siguiente:

“...la finalidad a la cual apunta el principio de oportunidad sería, en primer lugar, degradar o eliminar del sistema penal, dada su escasa importancia, ciertos delitos para los que se establecen penas irrisorias, privativas de la libertad; y en segundo lugar, descongestionar la administración de justicia, cuyos órganos jurisdiccionales se encuentran abarrotados de

expedientes, muchos de los cuales carecen de relevancia político-criminal, permitiendo de este modo el reordenamiento racional de los recursos disponibles, para lograr de esta manera la mayor eficiencia y eficacia del sistema; eliminando la apertura de procesos inútiles, la imposición de penas privativas de la libertad y el desgaste del aparato jurisdiccional, en procesamiento de delitos de bagatela; desviando de esta manera recursos que deben emplearse en el procesamiento de conductas que realmente constituyan delitos graves”²⁸.

3.1.2. Alemania

Según lo recogido por ORE GUARDIA, nos detalla que éste principio tendría sus orígenes en Alemania, a través de la "Ley Emminger" del 4 de enero de 1924, por el cual se facultó al Ministerio Público a abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos en que la culpa sea leve y carezcan de importancia las consecuencias dañosas, de tal manera que su persecución no afecte el interés público²⁹.

En este país los fines del principio de oportunidad pasan en principal medida por lo que ha llamado la doctrina una criminalidad de bagatela. Y por razones de utilidad que si los agrupáramos podrían ser:

²⁸ MOJICA, Carlos Alberto; VÁSQUEZ RIVERA, Juan Carlos. El Principio de Oportunidad. Sello Editorial Universidad de Medellín. Medellín

²⁹ ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal, 2da. Edic. Editorial Alternativas, Lima, 1999, pág. 132.

- “a) la escasa lesión social producida por el delito y/o la falta de interés público en la persecución;
- b) estimular la pronta reparación de la víctima;
- c) evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de la libertad; d)- favorecer la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento voluntario a un procedimiento de readaptación;
- e) favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y;
- f) construir el único instrumento desde el punto de vista de la “praxis” que permite llevar a cabo un tratamiento diferenciado entre los hechos punibles que deben ser perseguidos y aquellos otros “con un mínimo interés social y en los que la pena carezca de significación”³⁰.

Frente a estos fines ha sido severa la crítica y la censura por parte de la doctrina penal alemana que se opone al principio de oportunidad como solución prevalente para los problemas de falta de medios de la administración de justicia, y pese a reconocer su utilidad desde la perspectiva eminentemente práctica se centra en los aspectos constitucionales.

En este ordenamiento penal la Fiscalía está facultada para archivar un proceso cuando se trata de hechos punibles cometidos por fuera del ámbito territorial de la ley penal alemana (numeral 1 del párrafo 1 del artículo

³⁰ ARMENTA DEU, Teresa. Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad: Alemania España. Primera Edición. Editorial PPU. Barcelona 1991., págs. 194 y 195.

153c St PO), aunque tal facultad debe ejercerse en el entendido que tales delitos no sean de gravedad. Sería contrario al espíritu de la ley, por ejemplo, un sobreseimiento de una causa contra ex-oficiales nazis y militares argentinos que participaron en la desaparición y asesinato de ciudadanos alemanes durante la dictadura con base en esta excepción al principio de Legalidad.

Finalmente la vulneración del principio de igualdad se infiere de la eventualidad de trato diverso que permite la discrecionalidad atribuida al fiscal, máxime cuando se efectúa través de conceptos insuficientemente determinados como “falta de interés público en la persecución” o “culpabilidad mínima”. La discriminación se incrementa en aquellos casos en que la aplicación de la oportunidad se liga a prestaciones económicas ³¹.

3.1.3. Estados Unidos.

En un sistema procesal anglosajón como el norteamericano, el uso del principio de oportunidad aparece como un mecanismo institucionalizado de evitación de un juicio prolongado o de una condena mayor, por acuerdo entre las partes en la causa penal.

³¹ Ibídem., pág. 197.

De hecho, tal como lo refiere Sánchez Velarde³², entre el 75% y el 90% de las causas penales en los EE.UU. terminan como consecuencia del uso de éste sistemas.³³

El denominado "Plea Bargaining" es el acto por el cual el imputado manifiesta su decisión de declararse culpable, su conformidad con los cargos que se le formulan, renunciando de ésta manera al derecho que le corresponde de que su causa sea vista en un juicio con las garantías preestablecidas y renunciando, asimismo, a la posibilidad de que en él se pueda declarar su absolución.

Como bien determina el autor, en el sistema norteamericano, la declaración de culpabilidad puede manifestarse bajo tres formas: "a) voluntaria", en caso de evidencia de culpabilidad. "b) estructuralmente inducida", cuando la confesión es consecuencia de la previsión de una pena más grave, para quienes insisten en la celebración de la vista o porque es sabido que los jueces imponen una pena más benigna a quienes reconociendo su culpabilidad, renuncian al juicio contradictorio. "c) negociada", que consiste en el acuerdo entre el Fiscal y el acusado o su abogado, antes de la vista de la causa, que puede ser un acuerdo sobre

³² SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal. Lima. IDEMSA, 1994. p. 141 y ss.

³³ Cfr. TIMOTHY CORNISH. Conferencia Nacional de la Justicia Penal. Lima, abril 22-24 1993. Extractos del artículo de la Rev. De Ciencias Jurídicas de El Salvador. Set., 1992. p. 7.

el delito o sobre la pena, o sobre ambos.

Es aquí que el plea bargaining aparece, como las negociaciones que se llevan a cabo entre Ministerio Público y la defensa y en las que se acuerda la declaración de culpabilidad del acusado, evitando de ésta manera la realización del juicio a cambio de una reducción en los cargos formulados o a cambio de una recomendación de indulgencia hecha por el Fiscal al Juez.³⁴

El poder de discrecionalidad del Ministerio Público es muy amplio. La negociación puede, incluso, llevar a renunciar a la acción penal ya iniciada. Se habla por ello de una "Justicia contratada".

En ese sentido, el acuerdo transaccional entre el Ministerio Público y la defensa, que se reduce a la admisión de culpabilidad igual benignidad de la pena, significa que el "Public prosecutor" se puede comprometer a: 1) ejercitar la acción penal sólo por algunos de los delitos investigados. 2) proceder solo en cuanto a delitos menores y no por los de gravedad. 3) Omitir las circunstancias agravantes o reconocer las atenuantes.

Igualmente, el Fiscal esté posibilitado para no acusar a

³⁴ Cfr. DE DIEGO DIEZ, L. "Comunicación a la ponencia sobre el principio de legalidad y el uso de la oportunidad". En Rev. Poder Judicial, N°VI, Madrid, 1989. p.37 y ss.

un delincuente que carece de antecedentes penales, cuando se trata de un delito no violento o relacionado al tráfico de drogas, siempre que cumplan con un programa de rehabilitación.

Menciona a su vez que el interés de la vigencia de éste sistema comprende distintas órdenes, pero que confluyen en un punto central: La economía, en sentido amplio. Así, la declaración de culpabilidad y evitación del juicio beneficia a las partes implicadas, el acusado puede evitar la imposición de una pena más grave, evitar retrasos en el proceso, superar la incertidumbre que se derive del juicio y los gastos económicos que significa.

El Defensor, obtiene sus honorarios con menos esfuerzo, el Fiscal consigue una condena sin riesgos de absolución, además de mantener una buena imagen pública, y, por último, el Estado, que logra una declaración de culpabilidad sin mayor perjuicio económico, al evitarse la realización del juicio oral.

3.1.4. En la Legislación italiana

En Italia, la Legislación procesal establece mecanismos de acuerdo entre las partes a fin de evitar el juzgamiento o abreviar el proceso. Los procesos especiales atienden a éste cometido. El juicio abreviado y "el patteggiamento" se basan en la existencia de un acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público sobre la forma

y la pena, así como el denominado "Decreto Penal de condena" que apunta a evitar el debate oral.

El procedimiento de aplicación de la pena a pedido de las partes (patteggiamento) es el más parecido al plea bargaining, el acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público se manifiesta sobre, la pena, en cuanto a la aplicación de la sustitución de la misma, reducida a un tercio, siempre que en los hechos investigados aparezcan circunstancias atenuantes que así lo permitan o la pena privativa de la libertad no sea superior a dos años (art. 4 de la nueva ley italiana).

El juez antes de emitir resolución final podrá verificar la voluntad expresada en la petición o en el consenso a que se ha llegado, pudiendo disponer la comparecencia del imputado e incluso rechazar la solicitud si las propuestas a que han llegado las partes no son estrictas.

También aparecen criterios de oportunidad en el procedimiento por decreto (art.459) y se posibilita el cambio de trámite del procedimiento inmediato o el direttissimo a los ya citados, con igual posibilidad de consenso.

Al Ministerio Público se le faculta para dirigir la indagación preliminar y ejercitar la acción penal, además de otras facultades como la de tener iniciativa en la simplificación del procedimiento mediante la

adopción de criterios establecidos³⁵, conforme a lo señalado por la legislación italiana.

3.1.5. En la legislación argentina

En Argentina, la suspensión del procedimiento a prueba es un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el Tribunal para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico penales posteriores.

Sin embargo, si se transgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba, el Tribunal previa audiencia en la que interviene el imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal contra él. La aplicación de éste instituto depende, para el derecho procesal penal argentino, de tres requisitos.

1. El consentimiento del otorgamiento del beneficio por parte del imputado.
2. La reparación, en lo posible, del daño provocado a la víctima.

³⁵ SÁNCHEZ VELARDE. Ob. Cit. p. 96.

3. La no comisión de un delito anterior³⁶

En líneas generales se puede caracterizar la suspensión del procedimiento a prueba argentino como un beneficio con finalidad preventivo-especial. Igualmente, es un instrumento pensado sobre la base de fundamentos políticos criminales, orientado a combatir las consecuencias gravosas del propio sistema penal.

Podemos referirnos a que constituye una excepción al principio de legalidad de la acción penal, el cual determina que todos los delitos de acción pública deben ser perseguidos de igual manera y con la misma intensidad (Art. 71° CP).

En consecuencia, puede afirmarse que se trata en verdad, de una derivación del principio de oportunidad que implica apartarse de la finalidad retributiva de la pena y dirigirse hacia fines utilitaristas de prevención general y especial.

³⁶ MARINO, Esteban. Suspensión del procedimiento a prueba, en: El Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Análisis crítico. Editores del Puerto, 1993, p.29

CAPÍTULO IV

LA APLICACIÓN FACULTATIVA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Cuando nos referimos a este principio, normado en nuestro ordenamiento procesal penal estamos aludiendo a una institución procesal que quiebra la inflexibilidad del clásico principio de obligatoriedad de la acción penal.

4.1. El Principio de Oportunidad y la Obligación Funcional.

Al respecto y como bien lo señala Ore Guardia³⁷, nuestro sistema penal tiene una base inquisitiva pues señala que tiene como regla casi absoluta que todo delito debe ser investigado y sancionado, en base al principio de legalidad, por el cual ante la noticia de la posible comisión de un hecho delictivo, existiría la obligación de perseguirlo y sancionarlo a través de

³⁷ ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal, 2da. Edic. Editorial Alternativas, Lima, 1999, p.129.

las entidades competentes del Estado.

Dicha obligación funcional de perseguir y sancionar todos los delitos, tendría su sustento en la concepción de una justicia absoluta, a la que no puede escapar ningún delito.

La solución de conflictos es una característica importante del derecho, por ello GARCIA DEL RIO afirma que:

“...en un nuevo modelo de justicia penal, la preocupación central no debe ser sólo la solución formal del caso, sino la búsqueda de una solución para el conflicto social generado por el delito. En consecuencia el proceso penal no puede permanecer al margen ni de las exigencias propias del modelo de Estado en el que se desarrolla ni, por consiguiente, de las funciones que el derecho penal asuma en un concreto momento histórico y respecto a un ordenamiento jurídico determinado”³⁸.

Incide el autor en el hecho que cualquier proceso penal moderno, si bien ha de continuar fiel a su función tradicional, sirviendo a la aplicación del "ius puniendi" estatal con todas las garantías procesales y respecto a los derechos fundamentales del imputado, propios de un Estado de Derecho, no puede renunciar a tutelar, en la medida en que sea posible, otros derechos o intereses dignos de protección que la propia constitución reconoce, como son por ejemplo, el de la víctima del delito y el existente en la resocialización del imputado.

³⁸ GARCÍA DEL RÍO, Flavio. El Principio de Oportunidad. Ediciones Legales, Lima. 2000. p. 2

Infiere entonces que el principio de oportunidad reglado sirve al interés público existente en la resocialización del imputado y responde a las exigencias del moderno Estado de Derecho y a la función de prevención especial que la pena y el Derecho Penal asumen en él. En consecuencia, considera que la respuesta penal frente a la pequeña y grave criminalidad no puede ser la misma. Se precisa, en estos casos, de una respuesta jurídica adecuada, "justa y útil" incorporando la tendencia metodológica de separar la grande de la "pequeña o mediana" criminalidad.

Se coincide en éste punto con ORÉ GUARDIA, quien señala que:

“En la, actualidad nuestro país, e incluso países más avanzados, no han podido someter al sistema penal todos los delitos que se cometen en la sociedad, ya que el estado muchas veces carece de capacidad, de medios materiales y humanos para poder perseguir con todos los hechos delictivos. Señalando que, por esta carencia, se estima que aproximadamente el 75% de los delitos quedan fuera del sistema penal y pasan a formar parte de lo que la criminología denomina "cifra negra" de la delincuencia”³⁹.

Refiere que la imposibilidad de procesar todos los delitos, sobre todo los de mayor lesividad social, ha traído como consecuencia la necesidad de invocar y poner en práctica el

³⁹ ORÉ GUARDIA, Arsenio. ob. Cit. p. 130.

principio de oportunidad, el cual opera como correctivo de las disfunciones generales por la irrestricta aplicación del principio de legalidad.

Concluye que por ese motivo el principio de oportunidad viene siendo incorporado en la mayoría de reformas contemporáneas de los ordenamientos procesales penales.

Menciona que la Recomendación N° R (87) del Comité de Ministros del Consejo de Europa aconsejó a sus estados miembros incorporar en sus legislaciones el principio de oportunidad de la acción penal. Considerando que en base a esa interpretación se han llevado a cabo las últimas reformas procesales penales, con la finalidad de abreviar y acelerar los trámites procesales en los delitos de "pequeña y mediana criminalidad".

4.2. Confrontación de principios: Oportunidad y Legalidad.

Analizar el principio de oportunidad nos permite constatar que se le ha venido definiendo como aquel que se contrapone excepcionalmente al principio de la legalidad penal corrigiendo su disfuncionalidad, no obstante tal como lo expone BAUMANNTT, ésta afirmación no es del todo cierta:

“Se acostumbra resumir las excepciones al principio de legalidad recurriendo a la expresión genérica “principio de oportunidad” no se trata siempre de oportunidad sino de intereses y presupuestos jurídicos diferentes, como lo son los criterios de economía procesal, tramados

jurídicos-materiales o categorías de política criminal⁴⁰.

Considera que ésta generalización parte del poco interés puesto por doctrinarios para definir los rasgos más saltantes del citado principio; refiere que incluso el mismo Roxin tan meticuloso en casi toda su obra se limita a asumir que el principio de oportunidad es la contraposición teórica del principio de legalidad, mediante el cual se autoriza al Fiscal a optar entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo - archivando el proceso - cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran probabilidad, ha cometido el delito.

De otro criterio son tratadistas como Maier que lo definen como la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la "notitia" de un hecho punible o, inclusive, de la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o indefinidamente, condicional o incondicionalmente⁴¹.

En estos casos, pesar de haber un hecho delictuoso con autor determinado, el ejercicio de la acción penal se extingue por acto distinto de una sentencia, sustentado en los criterios de falta de necesidad de la pena o falta de merecimiento de la misma, todo ello con el fin de solucionar en parte el grave problema de sobrecarga procesal y congestión penitenciaria.

⁴⁰ BAUMANN, Jürgen. Derecho Procesal Penal, Traducción del alemán por Conrado Finzi, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1986. p. 62

⁴¹ MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal argentino, Buenos Aires, Hammurabi, 1997, T - b, p. ss

Mientras que Sánchez Velarde lo define como la discrecionalidad concedida al Ministerio Público a fin de que éste decida sobre la persecución penal pública, especialmente en los casos de delitos leves y con tendencia a ampliarse a la mediana criminalidad⁴².

Igualmente existen autores nacionales que inciden en la naturaleza excepcional del principio de oportunidad, entre ellos, Cubas Villanueva quien señala este principio como una excepción al reino del principio de legalidad. Refiere que éste principio en ordenamientos como el nuestro está reglado, es decir, sólo se puede aplicar a algunos delitos, en función de que afecten levemente el interés social.⁴³

Finalmente, Catacora Gonzales dice que el principio de oportunidad es la, antítesis del principio de legalidad u obligatoriedad. Agrega que sus propósitos son loables y podría convertirse en un gran instrumento para descargar a los fiscales y juzgados de trabajo inútil.⁴⁴

Como hemos podido apreciar, si bien existen divergencias en la doctrina nacional y extranjera, sobre la naturaleza excepcional, o no del principio de oportunidad, respecto del principio de legalidad, hay consenso en cuanto a la conveniencia de la facultad discrecional del Fiscal para ejercitar o no la acción penal en los supuestos que establezca

⁴²SANCHEZ VELARDE, Pablo. En VI Taller Nacional sobre Justicia y Derechos Humanos Materiales de Lectura, Lima. CEAS. 1992.

⁴³ CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob. Cit. p. 138

⁴⁴ CATACTORA GONZALES, Manuel G. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima. Rodha, 1997. p. 196

la norma procesal penal, con la finalidad de aliviar al organismo jurisdiccional de una sobrecarga de delitos de escasa afectación social y sobretodo que permita solucionar a las mismas partes afectadas de manera pronta y efectiva su problema.

4.3. El Principio De Oportunidad En El Nuevo Código Procesal Penal

El Código Procesal Penal de 1991 introdujo importantes innovaciones en el ámbito del Derecho Procesal penal, una de las cuales es precisamente el principio de oportunidad. Este cuerpo normativo establece en su Art.2. que el Ministerio Público, con consentimiento expreso del imputado, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:

- 1) Cuando e) agente haya sido afectado directa⁴⁵ y gravemente por las consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada.
- 2) Cuando se trate de delitos que por su insignificancia o por su propia frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena mínima supere los dos años de la pena privativa de libertad o hubieran sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.
- 3) Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito o su contribución a la perpetración del mismo, sean

⁴⁵ Mediante Ley N°27072 del 23/03/99 se elimina el término "directa", dejando explícitamente establecido que el afectado puede ser tanto el autor como una persona vinculada a él.

mínimos, salvo que se trate de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

En los supuestos previstos en los incisos 2) y 3) será necesario que el agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima en ese sentido.

Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del Ministerio Público, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del proceso, bajo los supuestos antes mencionados.

Según el Código Procesal Penal peruano, el Trámite del Principio de Oportunidad se inicia de la siguiente manera:

El Fiscal al tomar conocimiento de un hecho ilícito (sea por sí mismo, por denuncia de parte o informe policial) y apreciando suficientes medios probatorios que acrediten su existencia, así como la vinculación del imputado con su comisión, y los supuestos previstos en el Artículo 2° del Código Procesal Penal, de oficio o a solicitud del imputado:

1. **Dispondrá la pertinencia para el inicio del trámite del Principio de Oportunidad**, citando al investigado y al agraviado con el fin de realizar una **DILIGENCIA DE ACUERDO**, cuyo desarrollo constará en acta.
 - Si el agraviado no asiste a la diligencia: el Fiscal **podrá determinar el monto** de la reparación civil que corresponda.
 - Si el imputado y la víctima no llegan a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil: el Fiscal **fijará el plazo**, que no podrá exceder de 9

meses.

- Si los involucrados arriban a un acuerdo y éste consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente: **No será necesario** llevar a cabo la Diligencia de Acuerdo.

2. **Una vez arribado el acuerdo y satisfecha la reparación civil:** el Fiscal expedirá una **DISPOSICIÓN DE ABSTENCIÓN**.

La **Disposición de Abstención** impide (bajo sanción de nulidad) que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos.

- Si se hubiera fijado un plazo para el pago de la reparación civil: se **suspenderán los efectos de la Disposición de Abstención** hasta su efectivo cumplimiento.
- Si el obligado no cumpliera con el pago de la reparación civil: se dictará Disposición para la **Promoción de la acción penal**, la cual no será impugnabile.
- Si el imputado cumpliera con cancelar el total del monto de la reparación civil o el acuerdo al que haya arribado con la víctima: se procederá a cerrar el caso, **archivándolo definitivamente**.

Facultad Adicional del Fiscal

Aquí debemos de hacer un alto, pues el numeral 5) del artículo segundo bajo tratamiento, nos presenta una singular innovación, que consiste en la facultad que se otorga al Fiscal para que (en la Disposición de

Abstención) imponga una sanción adicional al imputado, independientemente de la reparación civil a la que éste se hubiere comprometido, solicitando su aprobación al Juez competente. Medida que encuentra su justificación en el grado de responsabilidad del agente y en la tutela del interés público.

De tal manera que, señala el código, si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, [sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad], **imponer adicionalmente:** (1) el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y (2) la aplicación de las reglas de conducta [como: la prohibición de frecuentar determinados lugares, prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del Juez, comparecencia mensual, entre otras previstas en el artículo 64° del Código Penal] solicitará la aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los interesados.

Criterios de Oportunidad adicionales

El legislador ha optado por especificar los tipos penales a los cuales el Fiscal puede aplicar el Principio de Oportunidad, independientes a los tres supuestos tratados anteriormente.

Estableciendo, asimismo, las condiciones especiales que deben de presentar para su procedencia.

Es así que, el numeral 6) del artículo segundo del nuevo código adjetivo penal señala que procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122° (Lesiones Leves), 185° (Hurto Simple), 187° (Hurto de Uso), 189-A° primer párrafo (Hurto de Ganado), 190° (Apropiación Ilícita), 191° (Sustracción de Bien Propio), 192° (Apropiación Ilícita – Formas Atenuadas), 193° (Apropiación de Prenda), 196° (Estafa), 197° (Defraudación), 198° (Fraude de la Gestión de Persona Jurídica), 205° (Daños), 215° (Libramiento Indebido), y Delitos Culposos.

Excepto: cuando haya: pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito [que sea de igual o mayor gravedad, o afecte bienes jurídicos indisponibles.

En estos casos:

El Fiscal (de Oficio o a pedido del imputado o de la víctima) propondrá un **ACUERDO REPARATORIO**.

- Si ambos convienen el mismo: el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal.
- Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero: el Fiscal promoverá la acción penal.

Procediéndose conforme al trámite ya desarrollado.

Procedimiento a Nivel Judicial

¿Cómo proceder si la acción penal ya hubiera sido promovida?

El Juez de la Investigación Preparatoria, previa **AUDIENCIA**, podrá (a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado) dictar **Auto de Sobreseimiento** -con o sin las reglas fijadas en el numeral 5) [Imposición de Penas Adicionales]- hasta antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos.

El auto de sobreseimiento no será impugnabile.

Excepto:

(1) En cuanto al monto de la reparación civil [si ésta es fijada por el Juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima], o

(2) Respecto a las reglas impuestas [si éstas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado].

Tratándose de los delitos previstos y sancionados en los artículos 122° (Lesiones Leves), 185° (Hurto Simple), 187° (Hurto de Uso), 189-A° primer párrafo (Hurto de Ganado), 190° (Apropiación Ilícita), 191° (Sustracción de Bien Propio), 192° (Apropiación Ilícita – Formas Atenuadas), 193° (Apropiación de Prenda), 196° (Estafa), 197° (Defraudación), 198° (Fraude de la Gestión de Persona Jurídica), 205° (Daños), 215° (Libramiento Indebido), y Delitos Culposos, en los que no haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito [que sea de igual o mayor gravedad, o que afecte bienes jurídicos indisponibles], **basta la presentación del acuerdo reparatorio** en un instrumento público o documento privado legalizado notarialmente, para que el Juez dicte auto de

sobreseimiento.

4.4. Efectos de la aplicación del principio de oportunidad en el Distrito Judicial de Lambayeque.

Para poder hacer un análisis adecuado del efecto de la aplicación del principio de oportunidad en nuestro distrito judicial, es prudente mostrar las cifras a nivel general para luego verificar dentro de ellas las específicas sobre el principio estudiado. Con ello estaremos en posición de establecer una reseña tanto de su eficacia cuanto de su efecto en la carga procesal.

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL (NCPP)

CARGA PROCESAL EN MATERIA PENAL EN FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES Y MIXTAS POR TIPO DE CASO, SEGÚN DISTRITO FISCAL ENERO - ABRIL 2017

DISTRITO FISCAL	DENUNCIA		EXPEDIENTE		INVEST. PREVENTIVA		TOTAL GENERAL		% DE ATENCIÓN
	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	
AMAZONAS	3,435	2,805	19	18	148	137	3,602	2,960	82.2
ANCASH	5,301	4,931	40	33	148	144	5,489	5,108	93.1
APURIMAC	1,940	1,563	83	58	130	118	2,153	1,739	80.8
AREQUIPA	18,423	11,529	4	4	339	311	18,766	11,844	63.1
AYACUCHO	4,854	3,523	395	286	312	293	5,561	4,102	73.8
CAJAMARCA	4,931	4,674	4	3	363	359	5,298	5,036	95.1
CALLAO (*)	40	37					40	37	92.5
Cañete	3,418	2,622	4	1	55	55	3,477	2,678	77.0
CUSCO	11,252	9,214	12	4	540	462	11,804	9,680	82.0
HUANCAYELICA	903	840	14	9	169	157	1,086	1,006	92.6
HUANUCO	5,622	4,946	8	8	64	62	5,694	5,016	88.1
HUAURA	5,332	4,823	2		154	154	5,488	4,977	90.7
ICA	11,556	8,922	1	1	194	143	11,751	9,066	77.2
JUNIN	8,364	6,616	283	156	152	148	8,799	6,920	78.6
LA LIBERTAD	14,196	11,941	3		148	144	14,347	12,085	84.2
LAMBAYEQUE	16,012	13,762	9	2	298	233	16,319	13,997	85.8
LIMA (**)	539	463					539	463	85.9
LIMA NORTE (*)	103	92					103	92	89.3
LIMA SUR (*)	68	56					68	56	82.4
LORETO	3,384	2,944	174	113	60	56	3,618	3,113	86.0
MADRE DE DIOS	1,946	1,906	1	1	88	79	2,035	1,986	97.6
MOQUEGUA	3,157	2,992			436	433	3,593	3,425	95.3
PASCO	1,050	942	4	4	53	51	1,107	997	90.1
PIURA	6,969	4,590			6	6	6,975	4,596	65.9
PUNO	4,079	3,287	47	28	265	264	4,391	3,579	81.5
SAN MARTIN	3,088	2,295	8	6	53	51	3,149	2,352	74.7
SANTA	5,481	4,874	27	22	90	80	5,598	4,976	88.9
SILVANA	1,666	1,385	8	7	58	58	1,732	1,450	83.7

Del cuadro anterior podemos apreciar que en nuestro distrito judicial de Lambayeque, se presentan como cifras generales las siguientes:

DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE
PERIODO ENERO ABRIL 2017

CASOS INGRESADOS	16,319
CASOS ATENDIDOS	13,997
DIFERENCIA	2,322
% DE ATENCIÓN	85.8%

Información que nos acerca a una apreciación general del servicio de justicia que se imparte en nuestro distrito a nivel de Ministerio Público, desde luego para alcanzar un estimado de lo que significa la eficacia del principio que estudiamos, debemos seguir indagando en datos más específicos.

Será preciso entonces recoger la estadística que se refiere a casos específicamente penales, pues necesitamos en forma general saber que cantidad de casos se ventilan en el área penal.

CARGA PROCESAL CONSOLIDADA EN FISCALÍAS PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MATERIA
ENERO - ABRIL 2017

MATERIA	INGRESADO	ATENDIDO	% DE ATENCIÓN
PENAL	242,837	188,680	77.7
CIVIL	23,945	17,948	75.0
FAMILIA	26,023	22,571	86.7
TOTAL	292,805	229,199	78.3

FUENTE: Sistema de Información al Trabajo Fiscal - SIATF y Sistema de Gestión Fiscal - SGF

Además de estos resultados generales se han encontrado datos referentes a los estado de los procesos, en los cuales encontramos al principio de oportunidad.

DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE			
PERIODO ENERO ABRIL 2017			
TOTAL	CASOS	16,319	100%
INGRESADOS			
ARCHIVADOS		8,127	49.8%
INV. PRELIMINAR		1,829	11.21%
DENUNCIA		432	2.64 %
PENDIENTE			
INV. PREPARATORIA		622	3.8%
PRIN. OPORTUNIDAD		1,192	7.31%
OTROS		4,117	25.23%

Si verificamos en el cuadro anterior las cifras correspondientes a los procesos resueltos bajo el principio de oportunidad, notaremos que arrojan un porcentaje muy pequeño, lo que nos hace pensar de que el efecto que ocasiona en la carga es negativo; es decir, de aplicarse con mayor incidencia el principio de oportunidad, de tenerse abiertas las opciones a verificar la gravedad de los delitos y con ello buscar mas bien una resolución de conflictos mas armoniosa, bien podría evitarse una carga procesal en la magnitud que la verificamos, desde luego esto requerirá de cambios no sólo estructurales si no también en sinceras capacitaciones a los operadores de justicia que lleve al proceso de investigación por la senda de la resolución de conflictos con el reflejo del principio de la mínima intervención del derecho penal.

CAPÍTULO V

CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS

Habiendo realizado la recopilación de información que nos permite tener la base doctrinaria y legal suficiente para poder establecer los puntos de la discusión que nos llevará a establecer si nuestra hipótesis planteada inicialmente puede ser comprobada y en que sentido.

5.1. Discusión.

Hemos de discutir aspectos que nos lleven a determinar el nivel de eficacia del principio de oportunidad en función a su aplicación y las capacidades tanto de los operadores de justicia cuanto del mismo Estado para configurar las políticas adecuadas dentro del órgano de justicia a fin de que se cumplan con eficacia sus instituciones.

5.1.1. Incapacidad del Estado e Ineficacia del sistema penal.

Nuestro sistema judicial penal no cuenta con los recursos ni los medios suficientes para implementarse adecuadamente a fin de conocer y resolver todos los casos penales bajo su competencia. El Estado se encuentra imposibilitado de ocuparse de todas las transgresiones normativas que se realizan, razón por la cual en aras de la eficacia de la persecución penal, la solución más acertada es la que va dirigida a buscar mejores y eficaces métodos para que puedan alcanzar mejores resultados o cuando resulte innecesaria su aplicación, sin dejar de controlar como un ente protector de la sociedad.

- **Principio de Celeridad.** Tenemos un sistema judicial lento y oneroso para los involucrados en un proceso penal, incluida la víctima del delito, a pesar que “el acceso a la justicia es gratuito” y que “justicia que tarda no es justicia”. Por ello es que urge un mecanismo adecuado que permita cumplir con efectividad los principios de eficacia y celeridad procesales, a efectos de buscar una pronta solución a un conflicto penal y evitar ocasionar perjuicio a los justiciables.
- **Principio de Economía Procesal.** En palabras de *Beling*, el interés común exige que el proceso se realice rápidamente, ya que no puede rendir ventajas económicas por su misma naturaleza, que sea al menos, lo más barato posible. Uno de los efectos de la aplicación del Principio de Oportunidad es la pronta conclusión de una investigación penal, lo que significa, ahorro económico para el Estado, que no tendrá que continuar generando gastos en material logístico y de personal, el cual podrá destinar a otras labores; y para las partes, pues no requerirán más del asesoramiento legal particular, ni acudir a la realización de las conocidas diligencias, ahorrando tiempo y, por ende, dinero.
- **Principio de la *Ultima Ratio*.** La doctrina penal coincide en postular que existen conductas que no son graves y que, por ende, no afectan trascendente el interés público, que el derecho penal debe esgrimir cuando resulta absolutamente necesario, ya que las partes en conflicto pueden tener amparo de sus pretensiones ejercitándolas por otros medios legales. Es decir, sólo debe utilizarse el derecho penal como un

último recurso o de estricta necesidad (*última ratio*). Pero el Estado no debe intervenir en toda situación, sino en hechos que la ley penal ha determinado específicamente, constituyendo la pena, tan solo un instrumento subsidiario.

- **Principio de Mínima Intervención.** Este principio sostiene que el derecho penal a través del Estado, a quien se la ha conferido el *jus puniendi*, debe reducir su intervención a aquellos casos en los que sean estrictamente necesario en el término de utilidad social general, es decir habrá de intervenir sólo en aquellos casos cuando no queden otros medios para la protección social. El poder punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el Principio de Intervención Mínima. O sea, el derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. Las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras ramas del derecho. De ahí que se diga también que el derecho penal tiene carácter subsidiario frente a las demás ramas del ordenamiento jurídico.
- **Principio de Insignificancia.** Este principio denominado también “Principio de Bagatela” sostiene que deben considerarse atípicas aquellas conductas que importan una afectación superficial del bien jurídico.

5.1.2. Acción Penal, Principio De Legalidad Y Principio De Oportunidad

Nos interesa dirigir la discusión hacia el efecto de sobrecarga

procesal que se genera como uno de los núcleos problemáticos estructurales que se ha materializado en el Ministerio Público de Perú por dos principales razones: primero, por el incremento de la conflictividad, y segundo, por la falta de una óptima política de racionalización de recursos para afrontarla. Evidentemente, la solución tiene que ser enfocada desde un proceso de modernización integral del sistema de administración de justicia. Sin embargo, no es el momento de hacer un estudio macro de esta problemática, sino, vamos a limitarnos a focalizar brevemente el análisis de la importancia del criterio de selectividad frente al principio de legalidad procesal, desde la perspectiva de una mejor utilización de los recursos que legitime la fortaleza del Ministerio Público en la persecución del delito.

En una sociedad con una cultura altamente litigiosa, conflictiva y audaz para denunciar, que quiere servirse del Ministerio Público por causas irracionales y sin asidero penal, se debe oponer resistencia con una política de persecución penal eficaz y eficiente que coadyuve a la solución de la conflictividad con una gestión selectiva y discrecional.

La eficacia en la persecución penal tiene una seria dificultad en el clásico principio de legalidad procesal o de indeclinabilidad. La idea de que el principio de legalidad implica la investigación de todos los delitos, hasta las últimas consecuencias, no resulta clave para la vigencia práctica de un sistema de justicia acorde con una adecuada y eficiente política criminal que adopte el Ministerio Público.

El principio de legalidad procesal, tal como lo entiende BOVINO⁴⁶, impone a los órganos estatales correspondientes el deber de promover la persecución penal en todos los casos en que se tenga conocimiento de una noticia acerca de la posible comisión de un hecho punible de acción pública. Pero la cuestión de que el Ministerio Público deba investigar todos los delitos es un tema superado y criticado en la doctrina procesal contemporánea. CAFFERATA NORES⁴⁷ enseña que el principio de legalidad sufre sus más severas críticas desde la óptica de su aplicación práctica y allí nos encontramos con que por encima de lo que manda la ley, en verdad no tiene vigencia. La realidad indica que, en el mundo, no hay sistema judicial que pueda dar tratamiento a todos los delitos que se cometen; ni siquiera a los que a él ingresan. En la actualidad se admite que el principio de legalidad procesal no sólo carece de fundamentos teóricos y de posibilidades de realización efectiva, sino que, además, contribuye a la generación y consolidación de prácticas aberrantes en el marco de la justicia penal.

En efecto, el debate se ha centrado entre el tradicional principio de legalidad procesal y los mecanismos de selectividad o discrecionalidad que con mayor flexibilidad hacen del sistema de justicia penal uno eficiente y altamente deseable. En los países donde prima la legalidad procesal se piensa que todos los delitos deben ser investigados a través de la política de todo contra todo, lo que resulta una política que peca de insensatez pues en ningún país del planeta se puede investigar todos los

⁴⁶ ALBERTO BOVINO: Principios políticos del procedimiento penal; Editores del Puerto s.r.l; Buenos Aires, 2005; Pág. 15.

⁴⁷ JOSE I. CAFFERATA NORES: Cuestiones actuales sobre el proceso penal; Editores El Puerto s.r.l; 2005; Pág. 28.

delitos. El país que adopte como política la obligatoriedad de la persecución penal para todos los delitos, es un país que tiende a desarrollar una crisis o el colapso de su justicia penal.

En el Perú se gastan grandes cantidades de recursos al tratar de investigar todos los delitos sin tener en cuenta una efectiva selección de causas; contratos que se quieren criminalizar, “usurpaciones” que generalmente son actos netamente civiles, persecución de delitos ininvestigables y donde a veces la propia víctima no tiene interés en la persecución, complican las investigaciones de graves delitos que a la larga van a fotografiar a una fiscalía débil, sin una adecuada política de racionalización de recursos y que ante la sociedad pierde credibilidad; pero a pesar que el fiscal conoce que esas denuncias no tienen destino, apela muchas veces a la persecución penal pública absoluta e irrestricta, y en vez de sincerar su decisión con un archivo, dispone hasta ampliaciones de investigación generando falsas expectativas al otorgar a los denunciantes una apariencia inmoral de legalidad.

Así se genera la existencia de la eterna sobrecarga procesal. Ello explica el porqué tenemos que diferenciar los casos conducentes - relevantes y los inconducentes y sin futuro; en otras palabras, debemos orientar los recursos en perseguir delitos investigables como los homicidios, los delitos de corrupción o violaciones, en vez de perseguir delitos irrelevantes e inconducentes que solo van a incrementar el gasto público, distrayendo horas - hombre que deben destinarse, con mejores réditos, a casos conducentes, graves y de suma complejidad.

Pero la selectividad no solo reclama una gestión efectiva de micropolíticas por parte del fiscal en particular; también es fundamental para la gestión de los órganos de gobierno del Ministerio Público. Una muestra de gestión macro compatible con categorías auténticas de maximización de recursos es la directiva 01-2006-FN-MP que exige un compromiso a los fiscales para que incidan en la aplicación del principio de oportunidad y para que los fiscales provinciales participen directamente en las investigaciones.

Un punto crítico que indirectamente afecta la gestión de la conflictividad es el problema de las verificaciones de insumos químicos fiscalizados que repercute en la pérdida de horas-hombre y que deteriora el aspecto funcional de la persecución del delito al tener que participar el fiscal como “fedatario” de los actos administrativos que generalmente, sin ser delitos, tienen que efectuarse con la intervención de los fiscales penales y mixtos, que naturalmente van a distraer tiempo valioso en detrimento de la persecución de verdaderos delitos que ponen en peligro la seguridad pública.

En este contexto, la selectividad se erige como el criterio discrecional y funcional, que ha hecho del principio de legalidad procesal un principio censurable que en la justicia penal de hoy ha perdido vigencia práctica. Desafortunadamente, habrá quienes dirán que todos los delitos deben ser investigados en base al principio de igualdad y no discriminación, desde el menos grave al más grave. Pero ¿Será razonable que las instituciones estatales como el

Ministerio Público y el Poder Judicial orienten sus recursos a investigar delitos inconducentes y sin futuro? Haciendo un análisis económico del derecho, evidentemente que no. En consecuencia, la selección de causas se encuentra inmersa en la viabilidad de los procesos de reforma que tienen en el principio de legalidad procesal un burócrata enemigo de la eficiencia.

5.1.3. Recopilación Estadística

Para el nuevo Código Procesal Penal los mayores porcentajes de casos atendidos a nivel de Distrito Fiscal se tiene en Madre de Dios (97.6%), Moquegua (95.3%), Cajamarca (95.1%), Ancash (93.1%), Huancavelica (92.6%), entre otros, mientras que los menores

porcentajes se encuentran en Ayacucho (73.8%), Sullana (72.1%), Piura (65.9%) y Arequipa (63.1%).

CUADRO N° 01:

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL (NCPP) CARGA PROCESAL EN MATERIA PENAL EN FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES Y MIXTAS POR TIPO DE CASO, SEGÚN DISTRITO FISCAL ENERO - ABRIL 2017

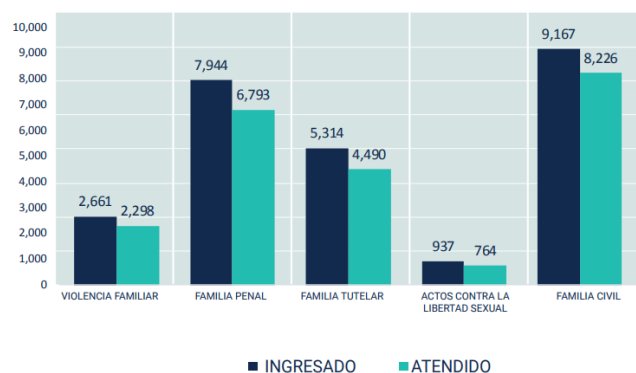
NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL (NCPP)

CARGA PROCESAL EN MATERIA PENAL EN FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES Y MIXTAS POR TIPO DE CASO, SEGÚN DISTRITO FISCAL ENERO - ABRIL 2017

DISTRITO FISCAL	DENUNCIA		EXPEDIENTE		INVEST. PREVENTIVA		TOTAL GENERAL		% DE ATENCIÓN
	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	INGRESO	ATENDIDO	
AMAZONAS	3,435	2,805	19	18	148	137	3,602	2,960	82.2
ANCASH	5,301	4,931	40	33	148	144	5,489	5,108	93.1
APURIMAC	1,940	1,563	83	58	130	118	2,153	1,739	80.8
AREQUIPA	18,423	11,529	4	4	339	311	18,766	11,844	63.1
AYACUCHO	4,854	3,523	395	286	312	293	5,561	4,102	73.8
CAJAMARCA	4,931	4,674	4	3	363	359	5,298	5,036	95.1
CALLAO (*)	40	37					40	37	92.5
CAÑETE	3,418	2,622	4	1	55	55	3,477	2,678	77.0
CUSCO	11,252	9,214	12	4	540	462	11,804	9,680	82.0
HUANCAYELICA	903	840	14	9	169	157	1,086	1,006	92.6
HUANUCO	5,622	4,946	8	8	64	62	5,694	5,016	88.1
HUAURA	5,332	4,823	2		154	154	5,488	4,977	90.7
ICA	11,556	8,922	1	1	194	143	11,751	9,066	77.2
JUNIN	8,364	6,616	283	156	152	148	8,799	6,920	78.6
LA LIBERTAD	14,196	11,941	3		148	144	14,347	12,085	84.2
LAMBAYEQUE	16,012	13,762	9	2	298	233	16,319	13,997	85.8
LIMA (**)	539	463					539	463	85.9
LIMA NORTE (*)	103	92					103	92	89.3
LIMA SUR (*)	68	56					68	56	82.4
LORETO	3,384	2,944	174	113	60	56	3,618	3,113	86.0
MADRE DE DIOS	1,946	1,906	1	1	88	79	2,035	1,986	97.6
MOQUEGUA	3,157	2,992			436	433	3,593	3,425	95.3
PASCO	1,050	942	4	4	53	51	1,107	997	90.1
PIURA	6,969	4,590			6	6	6,975	4,596	65.9
PUNO	4,079	3,287	47	28	265	264	4,391	3,579	81.5
SAN MARTIN	3,088	2,295	8	6	53	51	3,149	2,352	74.7
SANTA	5,481	4,874	27	22	90	80	5,598	4,976	88.9
SULLANA									72.1

Cuadro N° 02

CARGA PROCESAL DE FISCALÍAS PROVINCIALES SEGÚN ESPECIALIDAD, ENERO - ABRIL 2017



CUADRO N° 03:

CARGA PROCESAL EN MATERIA DE FAMILIA - EXPEDIENTES EN FISCALIAS PROVINCIALES DE FAMILIA Y MIXTAS POR ESPECIALIDAD, SEGÚN DISTRITO FISCAL ENERO - ABRIL 2017

DISTRITO FISCAL	VIOLENCIA FAMILIAR		FAMILIA PENAL		FAMILIA TUTELAR		FAMILIA CIVIL		TOTAL GENERAL		% DE ATENCIÓN
	INGRESADO	ATENDIDO	INGRESADO	ATENDIDO	INGRESADO	ATENDIDO	INGRESADO	ATENDIDO	INGRESADO	ATENDIDO	
AMAZONAS	1	1	13	10	14	14	103	101	131	126	96.2
ANCASH	24	23	92	90	90	82	217	202	423	397	93.9
APURIMAC			23	18	28	18	60	47	111	83	74.8
AREQUIPA	10	9	111	107	60	50	553	510	734	676	92.1
AYACUCHO			98	76	57	46	94	78	249	200	80.3
CAJAMARCA	30	30	43	42	33	32	299	278	405	382	94.3
CALLAO	71	67	116	103	14	12	265	230	466	412	88.4
CAÑETE	8	7	66	61	86	74	103	91	263	233	88.6
CUSCO	5	5	169	139	75	62	344	286	593	492	83.0
HUANCABELICA	3	3	10	10	26	25	62	60	101	98	97.0
HUANUCO	1	1	87	85	45	37	171	155	304	278	91.4
HUALAURA	32	32	28	25	29	28	333	292	422	377	89.3
ICA	7	7	109	105	89	82	590	555	795	749	94.2
JUNIN	15	14	75	72	27	23	360	334	477	443	92.9
LA LIBERTAD	174	137	151	126	51	39	269	237	645	539	83.6
LAMBAYEQUE	72	63	133	110	70	58	723	648	998	879	88.1

Cuadro N° 04:

CARGA PROCESAL GENERAL

CARGA PROCESAL CONSOLIDADA EN FISCALÍAS PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MATERIA
ENERO - ABRIL 2017

MATERIA	INGRESADO	ATENDIDO	% DE ATENCIÓN
PENAL	242,837	188,680	77.7
CIVIL	23,945	17,948	75.0
FAMILIA	26,023	22,571	86.7
TOTAL	292,805	229,199	78.3

FUENTE: Sistema de Información al Trabajo Fiscal - SIATF y Sistema de Gestión Fiscal - SGF

Cuadro N° 5:

Estadísticas de procesos en la aplicación del Código Procesal Penal a nivel nacional.

DELITOS	TOTAL	AMAZONAS	ANCAASH	AREQUIPA	CAPAMARCA	CANETE	CUSCO	HUANUCO	HUAYLA	ICA	LA LIBERTAD	LAMBAYEQUE	LORETO	MADRE DE DIOS	MOQUEGUA	PISCO	PIURA	PUÑO	SAN MARTÍN	SANTA	SULLANA	TACNA	TUMBES	UCAYALI
TOTAL	356,835	7,637	13,092	43,002	10,982	8,027	28,300	18,245	13,185	24,486	31,019	37,068	11,842	5,256	8,253	4,191	22,982	10,500	6,746	15,238	9,982	11,384	8,213	9,216
ACUERDO REPARADORIO	1,476	23	50	92	162	17	134	62	44	51	113	148	15	115	83	31	75	38	29	42	39	74	8	31
ASIGNADO PNP (PRELIMINAR)	10,715	190	127	1,965	18	521	1,581	351	898	402	894	992	209	1,069	110	61	283	85	63	216	92	227	313	48
CALIFICACIÓN DE OPERATIVO	911	75		216	22		300	3	11	27			23		2	30	14	106		57		17	2	6
COLABORACION EFICAZ	6								2								1					2	1	
CON ACUSACION	18,444	462	476	1,605	862	367	728	638	585	1,366	2,568	2,420	401	162	198	101	1,704	252	282	718	735	696	627	491
CON ARCHIVO (CALIFICA)	52,472	735	1,121	5,744	1,769	1,170	2,388	3,474	951	5,032	4,391	8,029	1,231	380	424	306	3,021	1,954	1,386	1,484	1,846	2,938	1,390	1,308
CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	90,707	1,277	4,065	11,333	2,920	2,154	8,274	3,900	3,489	4,830	8,386	10,041	3,152	577	3,347	862	6,482	1,850	1,239	3,754	3,411	1,794	1,646	1,924
CON ARCHIVO DEFINITIVO (INV. PREVEN)	10,414	251	413	995	824	293	1,506	622	176	423	434	390	169	148	818	150	40	786	238	701	83	493	53	408
CON CONCLUSION ANTICIPADA	75	1		4	2	10	2	1	3	10	7	13		1			7	2		4	4	3	1	
CON DICTAMEN	5,104	53	916	157	95	73	228	515	3	105	13	161	1,226	47	5	226	93	222	79	595	3	26	4	261
CON INVESTIGACION PRELIMINAR	48,514	1,406	1,735	6,797	970	1,393	4,912	1,899	2,129	3,631	4,444	4,155	1,395	790	796	447	4,193	778	929	1,625	996	577	1,540	977
CON PREVIO	46	3	2		4		1	24			1	4	1	2		1	2					1		
CON PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (CALIFICA)	3,730	39	48	583	83	34	196	456	13	322	10	417	201	137	2	11	247	184	10	10	28	428	3	268
CON PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (PRELIMINAR)	13,428	410	700	1,424	362	225	1,220	430	617	900	1,072	1,164	1,129	191	309	123	723	366	450	610	164	57	342	426
CON PRINCIPIO OPORTUNIDAD (INTERMEDIA)	372	3	3	34	7	36	8	3		43	116	51		3	3	1	40	4	1	9	3		4	
CON PRINCIPIO OPORTUNIDAD (PREPARATORIA)	146	2	18	3	3	2	5	8	2	3	14	11	27		2	2	6	3	3	15	3	3	2	9
CON PROCESO INMEDIATO	324	29	12	9	44	1	4	9		44	8	1	16		3		131	3		1		4	4	1

Como es de apreciar, en el departamento de Lambayeque, existe una gran diferencia, de procesos en los que califica el principio de oportunidad solamente 10 expedientes 13997 expedientes atendidos, según el cuadro de la carga procesal, lo que nos da el indicio de una aplicación muy escasa, dejando de lado la aplicación del principio de mínima intervención del derecho penal y la vulneración del principio de inocencia del imputado.

CONCLUSIONES

- Se puede afirmar que una correcta aplicación del Principio de Oportunidad en nuestro ordenamiento legal permitirá la efectividad de la administración de justicia, destacándose no solo el buscar la eficacia del sistema a través de una selectividad controlada de los casos, sino el de favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, como también la búsqueda de la celeridad procesal, el nuevo impulso de los objetivos de la pena (prevención y resocialización), la ratificación del Principio de Igualdad, la finalidad de obtener la rápida indemnización de la víctima, evitar los efectos criminógenos de los antecedentes judiciales y penas cortas privativas de libertad y contribuir a la consecución de una justicia material por sobre la formal.
- No es necesario recurrir a las estadísticas para apreciar que hoy en día, a pesar de las modificaciones legales y extensas discusiones doctrinarias, el Principio de Oportunidad no es utilizado en la forma ni en la intensidad debida por gran parte de los señores Fiscales, debido a que lo ven como un retraso en el ejercicio de sus funciones, ya que en muchas ocasiones no se logra ubicar al imputado o éste no asiste a las diligencias, o no presta su consentimiento o las partes no arriban a un acuerdo, o por último, éste no es cumplido.
- La falta de especialización en materia de técnicas de negociación y conciliación por parte de los operadores, así como un desconocimiento casi generalizado de la figura del Principio de Oportunidad, gracias, en parte, a la escasa difusión e importancia que se le ha dado, contribuye de

manera alarmante y preocupante a que los casos denunciados no sean atendidos y solucionados en forma eficiente.

- Se da por sentado que la deficiente aplicación de principio de oportunidad en el distrito judicial de Lambayeque, está causando una controversia con el principio de la mínima intervención del Derecho Penal , toda vez que de aplicarse con mayor incidencia y eficacia el principio de oportunidad, se estaría depurando los procesos que no requerirán de su culminación para alcanzar satisfacer los requerimientos de la parte agraviada, puesto que con un buen acuerdo reparatorio se puede conseguir una discriminación de procesos de mor envergadura para que terminen y cedan el paso a la investigación a procesos de mayor importancia.

RECOMENDACIONES

Las medidas a tomar en consideración para la aplicación del principio de oportunidad son las siguientes:

1. Promover la aplicación del principio de oportunidad en instancia jurisdiccional, de oficio o a pedido de parte (Ministerio Público, imputado) siempre y cuando exista reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado.
2. Dar potestad al fiscal para negociar con el imputado, el arrepentimiento activo y reconocimiento judicial de su responsabilidad penal, a cambio de una reducción considerable de la pena.
3. Buscar mediante el principio de oportunidad la confesión sincera, el arrepentimiento activo y el reconocimiento judicial de culpabilidad como medio para que el imputado acceda a beneficios de una penalidad benigna
4. Considerar al principio de oportunidad como un conjunto de mecanismos político criminal, para dotar a la justicia penal de celeridad y eficacia procesal.
5. El derecho comparado nos demuestra que el principio de oportunidad es una facultad jurisdiccional, donde colabora el fiscal.
6. La eficiencia y eficacia del principio de oportunidad depende en gran medida del imputado, quien al acogerse mediante el reconocimiento de su responsabilidad a los beneficios de reducción de pena esta posibilitando la celeridad procesal, al evitar la tramitación del proceso.

7. Es por ello importante crear mecanismos que vayan acorde con el respeto de los derechos fundamentales de la persona y las garantías constitucionales del imputado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ANTON, J. (1986). **Derecho Penal, Parte general**. Editorial Akal/Iure, 2da Edición. Madrid.
2. BARDALES, A. (2003). **El Principio de Oportunidad en el Proceso Penal Peruano**. Librería y Ediciones Jurídicas.
3. BACIGALUPO, E. (1987). **Discriminación y Prevención en Poder Judicial**. N° 11, Madrid. Pág. 13.
4. BOVINO, A. (2005). **Principios políticos del procedimiento penal**; Editores del Puerto S.R.L.; Buenos Aires. Pág. 15.
5. CAFFERATA, J. (2005). **Cuestiones actuales sobre el proceso penal**; Editores El Puerto S.R.L. Pág. 28

6. CABANELLAS, G. (2002). **Diccionario Jurídico Elemental**, Editorial Heliasta. Buenos Aires.
7. CABRERA, R. (1994). **Tratado de Derecho Penal, Parte general**”, Editora Jurídica Grijley, 5ta Edición. Lima.
8. CATACTORA, M. (1997) Manual de Derecho Procesal Penal. Lima. Rodha, p. 196.
9. CUBAS, V. (2003). **El Proceso Penal**. Teoría y Práctica. Palestra editores. 5ta edición. Lima. p, 54
10. CREUS, C. (1987). **Derecho Procesal Penal**. Buenos Aires. Astrea. p. 36.
11. GARCÍA DEL RÍO, F. (2000). **El Principio de Oportunidad**. Ediciones Legales, Lima. p. 2
12. GARCIA RADA, D. (1965). **Instituciones del Derecho Procesal Penal**” Ediciones Studium. Lima.
13. GIMENO SENDRA, V. (1991). **Fundamentos del Derecho Procesal Penal**, Madrid. p. 34
14. MAIER, J. (1997). **Derecho Procesal Penal argentino**, Buenos Aires, Hammurabi, T – 1 a.
15. ORÉ GUARDIA, A. (2003). **Manual de Derecho Procesal Penal**, 2da. Edic. Editorial Alternativas, Lima, p.129.
16. PALACIOS, D. (2003). **El Principio de Oportunidad en el Proceso Penal Peruano**. Editora FEAT. Lima – Perú.

17. PEDRAZ, E. **Principio de Proporcionalidad y Principio de Oportunidad.** Ponencia presentada en el III Congreso de Derecho Procesal de Castilla- León. Universidad de Salamanca, Salamanca.
18. SAN MARTÍN, C. (2001). **Derecho Procesal Penal,** Editora Jurídica Grijley, Vol. I. Lima.
19. SÁNCHEZ, P. (1994). **Comentarios al Código Procesal Penal.** Editora IDEMSA. Lima – Perú.
20. SANCHEZ, P (1992). En VI Taller Nacional sobre Justicia y Derechos Humanos Materiales de Lectura, Lima. CEAS.
21. SALAS, C. (2004). **Principio de Oportunidad en el Perú.** Boletín N° 9-10 – Escuela del Ministerio Público “Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel”, Pp. 11 –15. Año III.
22. TORRES, C. (1994). **El Principio de Oportunidad: Un Criterio de Justicia y Simplificación Procesal.** Editorial Gráfica Horizonte.
23. VILLAVICENCIO, J. (2006). **El proceso de terminación anticipada.** Suplemento de Análisis Legal Jurídica – Diario Oficial El Peruano. 04/04/2006.